

# Crisis sobre crisis

Hugo Eduardo Herrera



**A** la crisis política probablemente más honda en un siglo, se suma una crisis sanitaria que amenaza volverse hecatombe. Desde octubre se desplazó el suelo firme de las décadas pasadas y de tal suerte que no estábamos sabiendo hacia dónde íbamos. La situación excepcional mundial generada por el nuevo virus se agrega y nos deja perplejos.

No es implausible pensar en que los historiadores del futuro regresarán sobre nuestra época como respecto de un período a partir del cual ya nada fue igual.

El instante de la crisis es también el de la pérdida de validez de las reglas generales. Ella afecta no solo los dispositivos jurídicos, que caen en virtud de las medidas excepcionales. Además, es esperable que las maneras de tránsito de personas y mercancías, así como los modos de trabajar, comunicarnos e interactuar sean sometidos a variaciones relevantes.

¿Dónde quedan, en este momento de realidad más cruda, los discursos políticos dominantes, esos que sustentan las

instituciones y las críticas más coherentes a ellas? ¿Dónde el economicismo de la derecha educada en Chicago y el moralismo de la izquierda académica? Ambos pensamientos estaban poniéndole coto a las posibilidades de abrimos a lo nuevo y construir mañanas compartidos.

La idea general y abstracta del interés individual de un sujeto desarraigado, previo a la colectividad, en la derecha; y la otra idea, también general y abstracta, de una colectividad que deliberando pública y ocularmente sería capaz de llegar a verdades generales, en las que la singularidad individual es sometida; ambas quedan suspendidas por la irrupción a borbotones de la realidad de un pueblo mesocrático, primero, y de la sobria exigencia de cuidado, a la vez, personal y colectivo, después.

En la crisis de los dispositivos y los relatos generalizantes, la nación se vuelve prudente. La preocupación se irradia hacia los más cercanos y también al vecindario, al país, la humanidad, en esa línea. La

situación concreta adquiere mayor peso. Lo superfluo se discierne rápidamente de lo importante. Hay como un baño de extraña autenticidad, en el cual los propósitos funcionarios, los trámites, vienen a caer en un saco junto con la pose y las búsquedas inquietas de las “ardillas locas” en las que se convierten los sujetos de la urbe irritada.

En ese contexto solo mantienen su vigencia un pensamiento y una actitud abiertos al misterio desde el que la existencia emerge y al cual queda perpetuamente remitida, y sobre el que los economistas y los doctrinarios, los afectos a las ideas generales erigen y reparan

sus dispositivos. Ciertamente es que necesitamos dispositivos. Ya el lenguaje es uno. Pero también requerimos tierra, afecto, paisaje, silencio. Es en la medida en que las palabras y las reglas no pierden su capacidad de abrirse a la existencia concreta y su significado, que cabe vivir —política, económica, cultural, social— vidas menos inauténticas.

**“No es implausible pensar en que los historiadores regresarán sobre nuestra época como respecto de un período a partir del cual ya nada fue igual”.**

## 1984

Claudio Alvarado R.  
Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)



**D**esde el 15 de noviembre se dice que al fin podría quedar atrás la “Constitución de Pinochet”. ¿Es así? En estos días enrarecidos puede ser útil recordar la sinuosa trayectoria del Chile posdictadura.

En su apasionante “Nueva crónica de la transición”, Rafael Otano encuentra “la hora cero” de ese período en un seminario “poco ruidoso” de julio de 1984, en el Hotel Tupahue. Ahí, Patricio Aylwin propuso el camino que, a la postre, permitiría 30 años atrás el retorno a la democracia y su inédita articulación —para nosotros— con la economía de mercado. La apuesta de Aylwin fue osada: jugar con las reglas transitorias de la Carta de 1980, eludiendo “deliberadamente” el debate sobre su legitimidad. Acá se incubaron el triunfo del No, las reformas plebiscitadas de 1989 y las lógicas políticas que ahora crujen, pero que en ese entonces permitieron una salida pacífica del régimen autoritario.

En suma: tildar la Constitución vigente como un mero legado dictatorial implica una caricatura en términos jurídicos (el texto original otorgado por la Junta Militar jamás rigió en democracia); pero es tanto o más problemático considerando las dinámicas políticas involucradas. Todo indica (siguiendo a Joaquín Fernandois) que la decisión de Aylwin respondió a un masivo anhelo nacional.

Ya fuere por eso o por sus culpas del pasado, destacados opositores a Augusto Pinochet valoraron tempranamente esa apuesta gradual, incomprensible para la nueva izquierda frenteamplista. Con sus diferencias, Francisco Cumplido, Renato Cristi y Alejandro Silva Bascuñán vislumbraron la legitimación constitucional por la vía del ejercicio democrático (elecciones, funcionamiento del Congreso, etc.). Incluso Tomás Moulian habló —con pesar— de una operación de legitimación de la Carta Magna. Desde luego, hay una

**“Tildar la Constitución vigente como un mero legado dictatorial implica una caricatura”.**

continuidad entre aquel proceso y la significativa reforma del año 2005, bajo el gobierno de Ricardo Lagos.

Todo ello alteró la fisonomía de la Constitución, pero los cambios fueron conducidos por (y reducidos a) los actores políticos y sus códigos imperantes: nunca hubo un plebiscito ratificador; el sistema binominal rigió otro decenio más. A la larga, la Carta Fundamental simbolizó e interpretó tanto los acuerdos como las prácticas políticas de casi tres décadas de vida democrática (y de gobiernos concertacionistas). Su estabilidad dependía del Chile de la transición y de poder “eludir deliberadamente el tema de la legitimidad”. Mucho antes del 18 de octubre esto ya era inviable. Nuestro desafío —una vez pasada la crisis sanitaria— será enfrentar pacíficamente esta realidad, no a Pinochet. Con respeto al disenso democrático, liderazgo y creatividad política, tal como Patricio Aylwin.

Ernesto San Martín

Laboratorio de Estadística Social UC.



## Precaución y prudencia política

**E**stamos viviendo una crisis sanitaria con muy escasos precedentes: la pandemia del covid-19. Hasta hace unas semanas, era una realidad lejana y ajena; hoy está presente y de forma más acelerada cada día. Se requieren decisiones políticas firmes y fuertes para desacelerar el contagio, las que se tienen que tomar en un contexto de altísima incerteza debida a esta pandemia.

El político quiere tomar decisiones prudentes; es lo que hemos observado tanto en el Presidente de la República como en su Gobierno: en un primer momento se señaló que no se iban a cerrar escuelas y luego se optó por lo contrario. Ambas decisiones, se indicó, se basaron en información científica a pesar de que carecía de unanimidad. Por otro lado, la presidenta del Colegio Médico ha tomado un rol público esclarecedor, proporcionando otras recomendaciones que, en opinión de muchos políticos, aseguran decisiones a la altura de las circunstancias. Ambas actitudes son manifestaciones del paradigma de «Políticas Públicas Basadas en Evidencia», el cual sustituye la política por la ciencia, llevándonos a grados de tecnocracia.

Pero hay otro modo de asegurar la autonomía de la política por sobre la ciencia: el «Principio de Precaución», que establece que “cuando la ocurrencia de un daño, aunque incierto a la luz de los conocimientos científicos, pueda afectar grave e irreversiblemente al medio ambiente (y otros sectores públicos), las autoridades públicas garantizarán, mediante la aplicación de este principio y dentro de sus ámbitos de aplicación, que se lleven a cabo procedimientos de evaluación de riesgos y que se adopten medidas provisionales y proporcionadas para prevenir la ocurrencia del daño”. Los riesgos irreversibles son el colapso del sistema sanitario nacional, y la muerte de muchos ciudadanos. La información científica nos dice que hay un aumento acelerado de los contagios, más no se puede predecir. La prudencia está en esto: arriesgarse a tomar decisiones en pos del bien común. Y sí, se requiere que el Presidente decreta aislamiento total y que el país asuma ese costo, el cual nunca será mayor que la pérdida de vidas ocasionada por el colapso de nuestro frágil sistema sanitario.